

Lunes 7 de setiembre de 2026

Desmarcarse será el formato futuro de la política de coalición

El inicio de la ronda de contactos individuales en Torre Ejecutiva redefine las dinámicas de la oposición. Mientras el Partido Nacional coordina tiempos, el Partido Colorado, liderado por Andrés Ojeda, estrena un canal directo con el Ejecutivo presidido por Yamandú Orsi para marcar agenda propia en seguridad y política exterior, desafiando las reglas de la unidad de bloque.

ANÁLISIS:

- Autonomía táctica colorada
- Propuestas de seguridad sobre la mesa

escribe
César García Acosta

El Estado no reza
La política y el Cardenal
Eduardo Irigoyen

El extraño arte
de perder los estribos
Pablo Caffarelli

Suicidios:
el enemigo silencioso
Daniel Manduré

Desmarcarse será el formato político de la coalición

La icónica frase de Wilson Ferreira Aldunate cuando acordando políticas de Estado buscaba distinguirse de sus oponentes circunstanciales, diciendo «Juntos sí, entreverados no», parece haberse transformado en un boomerang para los intereses blancos que en aras de su tan ansiada bipolaridad con el Frente Amplio y el gobierno, pusieron contra la pared a la virtual Coalición Republicana al impedir reunirse con el presidente de la República, quien no sólo se juntó con los cabildantes, sus socios circunstanciales en la actual rendición de cuentas del gobierno, sino con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien fue quien promovió estos encuentros. El Partido Nacional declinó participar en una reunión conjunta convocada por el presidente Yamandú Orsi en el mes de agosto debido al profundo malestar político generado por las acusaciones del oficialismo contra el expresidente Luis Lacalle Pou.

El Contexto Político

La convocatoria original: El presidente Orsi invitó a los líderes de todos los partidos políticos a un encuentro en conjunto para intercambiar posturas sobre política internacional antes de su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El caso Cardama: Días antes de la reunión, el Frente Amplio realizó una conferencia de prensa sobre la contratación de un astillero para patrulleras oceánicas de la Armada durante el período anterior. En esa instancia, la fuerza política de gobierno señaló responsabilidades políticas y omisiones de la administración de Luis Lacalle Pou.

El quiebre del clima político: Desde la cúpula nacionalista consideraron que estas acusaciones y el tono de confrontación dañaban las condiciones mínimas de diálogo institucional.

La Postura del Partido Nacional

Rechazo al formato grupal: El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se comunicó con Orsi para transmitirle que no estaban dadas las condiciones para asistir a una cumbre multipartidaria en esas circunstancias,

dejando en offside a sus socios en la Coalición Republicana quienes pretendían un enfoque de «bloqueo» de los asuntos institucionales.

Necesidad de distensión: Los blancos plantearon la urgencia de «bajar la espuma» ante un clima que consideraban de confrontación electoral prematura, interpretando el llamado original más como una instancia superficial que como un espacio genuino de acuerdo.

Cambio de modalidad: Ante la ausencia y postura del Partido Nacional, el mandatario terminó cancelando la reunión conjunta y optó por convocar a los líderes opositores por separado en encuentros individuales de tipo «mano a mano».

Tras la decisión del Partido Nacional de no concurrir a la reunión colectiva original, tanto el **Partido Colorado (PC)** como **Cabildo Abierto (CA)** adoptaron posturas orientadas a priorizar el diálogo institucional, aunque con matices en sus declaraciones públicas:

Postura del Partido Colorado

Los promotores de la idea: La iniciativa del encuentro con el mandatario



surgió originalmente del propio secretario general del PC, el senador Andrés Ojeda, en una conversación telefónica con Orsi.

Uruguay como un solo bloque: Ojeda defendió enfáticamente la necesidad de asistir a la convocatoria presidencial alegando que la política exterior debe mantenerse como una «política de Estado» por encima de los partidos. Argumentó que «primero está el Uruguay y después las diferencias políticas», enfatizando la importancia de mostrar estabilidad institucional hacia el exterior

Desmarcarse, el nuevo formato

Ante el desmarque inicial del Partido Nacional, los colorados terminaron declinando la invitación colectiva para evitar fisuras públicas e internas. Ojeda agradeció el esfuerzo de los blancos para coordinar una salida consensuada y vio de manera muy positiva el cambio al formato «mano a mano». Fue el primero en ser recibido individualmente por Orsi el viernes 4 de septiembre.

El cambio de formato de «bloqueo» genera un comportamiento que los alineados en la Coalición Republicana deberán enfrentar sumando estrategias que, sin alterar el enfoque político opositor, no tenga a los blancos como los hacedores del relacionamiento institucional.

El tiempo para las coaliciones al estilo seregnista parecen no tener espacio. Por eso, lo del principio: el boomerang de Wilson desarticula el poder que los blancos ostentaban dentro de una demasiado virtual Coalición Republicana: «Juntos sí, entreverados no».



Cesar GARCÍA ACOSTA
Editor del semanario **OPINAR**
Técnico en Comunicación Social

CONTENIDOS

Redactor Responsable
Tcs César GARCÍA ACOSTA

Domicilio:
Martín C. Martínez 1630/401
Montevideo-Uruguay

Teléfono:
0986866686

Registro MEC
N° 2169/07, Tomo VI, fs. 388
Registro de Ley de Imprentas

Web: opinar.com.uy

Contacto:
cesargarciacosta@gmail.com

2 Desmarcarse será el formato político de la coalición CÉSAR GARCÍA ACOSTA 3 Nuestro estado de salud en seguridad pública **ZÓSIMO NOGUIRA 4** La Venezuela de Trump **RICARDO ACOSTA 5** El Estado no reza **EDUARDO IRIGOYEN 6** Un enemigo silencioso **DANIEL MANDURÉ 7** Para construir una mayoría mayor, el PC tiene que crecer **EDUARDO FAZZIO 8** A río revuelto **GUZMÁN IFRÁN 9** El extraño arte de perder los estribos **PABLO CAFFARELLI 10** Alemania y la «OTAN», en alerta permanente **LORENZO AGUIRRE 11** Los 119 departamentos de la inteligencia artificial **GUSTAVO GÓMEZ RIAL 12** El Uruguay de ayer, el de hoy y el de mañana **RAMIRO ROSSI 13** Educación: entre la libertad y la desconfianza **CLAUDIO RAMA 14** La demografía también es desarrollo **FITZGERALD CANTERO**





Zósimo NOGUEIRA
Comisario General (r)

La seguridad siempre tiene problemas de salud, dolores de cabeza, de estómago, gripes. Siempre va sanando, hasta que aparece otro problema. Pero mirando hacia nuestra América y al contexto internacional siempre éramos abanderados. Los mas saludables.

PUBLICACIÓN UNIVERSITARIA DE 1980. El Abogado y Sociólogo Ulises Graseras comparaba la criminalidad entre EE. UU. y Uruguay en base a datos del FBI y la Jefatura de Policía de Montevideo. Previo a 1960 tuvimos la tasa de muertes violentas más baja del mundo.

El crecimiento de las ciudades corrió en paralelo con la criminalidad.

En EE. UU. entre 1960 y 1971 la tasa de delitos aumento 158% cada 100.000 habitantes. En las grandes ciudades brasileñas también crecía la criminalidad. En EE. UU. entre 1940 y 1971 los delitos violentos se multiplicaron por 4, y contra la propiedad por 6.

En 1940 por cada crimen violento en Uruguay, ocurría 1,5 en EE. UU. Para 1971 paso a 6,44.



En los delitos contra la propiedad la relación paso de 2,7 a 9,5 en 1971. Nuestro país era la Meca, no había casi aumento de criminalidad.

La policía trabajaba como auxiliar de la justicia. Para detenciones regía el código de Instrucción Criminal de 1878, época de Latorre.

Un siglo después el presidente de facto Dr. Aparicio Méndez modificó el proceso penal, cesaron las detenciones en averiguación de antecedentes.

El código, decreto ley 15032 del 07/07/1980; inquisitivo, con la fase sumarial secreta, unifico las actuaciones judiciales en el juez penal; entro en vigor el 01/01/1981 simultáneamente con el decreto 690 del 30/12/1980 que le dio marco a la actuación policial.

A poco de aprobado ese CPP la sociedad comenzó a padecer fiebre de inseguridad; el delito campeaba con el único freno de la flagranza.

Aparicio Méndez en acuerdo con los ministros de Interior y Justicia aprobó el Decreto 690/980 que reglamenta facultades en los procedimientos de averiguación de delitos.

Considerando que las autoridades policiales en su carácter de auxiliares de la justicia deben investigar los delitos, reunir pruebas y entregar a los delincuentes a los jueces (Art 2 LOP)

Corresponde dotarles de las facultades necesarias para el cumplimiento de este precepto. Atento al Artículo 168 inciso 4to de la Constitución el presidente decreta.

Artículo 1ro. En los procedimientos administrativos de averiguación de delito, en caso de negativa de los eventuales implicados o testigos a concurrir voluntariamente a dependencias policiales la autoridad podrá tomar las medidas de conducción correlativas a la situación planteada y mantener en aquellas a las personas aludidas siempre con la finalidad de obtener la información que fuere posible.

Artículo 2do. En los casos del artículo anterior la autoridad policial deberá dar cuenta de inmediato al Juez competente y estar a lo que este resuelva. Salvo disposición judicial expresa la permanencia en los locales policiales de las personas indicadas no podrá prolongarse por más de 24 horas (Código del proceso Penal art. 123)

La «detención en averiguaciones» pasó a denominarse «conducción correlativa».

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE DEGRADACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA. Desde la llegada del Frente Amplio al poder hemos pasado en «cuidados intermedios, a puertas del CTI».

Nuestro estado de salud en seguridad pública

Hasta el 2005 hubo sanación con resultados tolerables.

El ministro Stirling con sus mesas de convivencia, programa vecino alerta y policía comunitaria contaba con las simpatías de la comunidad. Era el ministro mejor evaluado. Con recursos limitados por la peor crisis económica del país. Al partido colorado tuvo las peores elecciones de su historia, llegó el frente con su impronta y afán de cambios radicales. Ya participaban de su interna exguerrilleros devenidos en políticos.

Su primer ministro del Interior Dr. José Díaz elabora la ley de humanización carcelaria. Se reducen penas y liberan presos. Unos 1100 beneficiados.

Comenzó una gran reforma en la policía; se eliminaron unidades, crearon otras, redistribuyó personal, hubo vacíos de fiscalización y control, se modificó los sistemas de calificación y ascensos, entro el dedo político bajo el rotulo de selección. Mecanismo de captación política y penetración institucional.

Se promovió la sindicalización y se desmitificó la actividad policial con trato de operario o empleado público.

Algunas decisiones que restaron capacidad al Estado para resolver problemas de seguridad

Hubo y hay afectaciones de índole cultural, económica y social, pero todos reclaman mejoras de gestión de policías, fiscales y jueces.

Transformaciones en la policía que afectaron rendimiento y la distanciaron de la comunidad.

Extorsivo retiro de las cúpulas jerárquicas. Decían que estaban contaminados por convivencia con el gobierno de facto. Ya iban 20 años de democracia. Otra era la intención.

Captar la adhesión política de los policías.

Se generaron mecanismos para promover y ascender a «dedo». ¿Como lo hicieron?

Generando vacantes jerárquicas. Impulsando retiros.

Retiro de compensaciones por destinos, cargos de responsabilidad y mando, por ficto casa habitación; no devolución de montepíos por permanencia en el cargo habiendo alcanzado «computo máximo de haber de retiro».

Pase a retiro obligatorio de aquel al que no se le asignara destino por dos años. Se realizó una gradual y continua reestructura de las unidades policiales, modificando espacios de actividad y se redistribuyó el personal.

Al reasignar cometidos de las unidades disueltas quedaron vacíos de actividad, se perdieron archivos y recursos humanos valiosos. Eso provoco otra fuga de personal de los rangos medios.

Se vació de personal y cometidos a las comisarías que pasaron a ser meras receptoras de denuncias que se elevan a las actuales Jefaturas operacionales. Estas pasaron a concentrar patrullaje e investigación de delitos. La policía absolutamente atada a la voluntad de los fiscales. Inoperancia. Se prioriza la atención de las denuncias por su gravedad y trascendencia pública.

Desconexión entre demanda y resultado. Se denuncia en la Comisaría del barrio y lo sustancia la zona operacional a kilómetros de distancia.

Los jefes de policía a impulsos personales han ido rearmando unidades de investigación para las diferentes modalidades delictivas.

Se crearon unidades policiales con carácter nacional de poca operatividad, como la de policía rural para combatir el abigeato y la de Deportes. Fueron ubicadas muy distantes de los objetivos.

Se modificó la carrera, menos grados sin aumentar plazos de permanencia y promoviendo cuotas de ascensos por selección, por afinidades políticas.

Se puede alcanzar la máxima jerarquía sin la experiencia mínima razonable. Responsabilidad de médico especialista con currículo de practicante.

Reiterando criterios anteriores, se vuelven a contratar becarios para cumplir tareas en seccionales. Es personal seleccionado, pero son civiles, carecen del «estado policial».

Esto significa que no hay voluntad de cambio y que las comisarías continuaran siendo inoperantes, la comunidad seguirá distante de la policía.

Otro problema que condiciona enlentecido y resta capacidad operativa es la dependencia de apoyos de la Guardia Republicana.

Para una operación de riesgo, allanamiento, captura, disolver agitadores y no se cuenta con grupos Geo se debe aguardar a la GR. Hay que pedirlos, coordinar. Retrasa, resta eficiencia, diluye responsabilidades, justifica omisiones.

Por otro lado, la GR, una unidad de choque asume tareas propias de las comisarías.

Otro mazazo para la seguridad ha sido el actual CPP. Cárceles llenas por los extorsivos acuerdos en los juicios abreviados.

Hay que derogarla como dice Bordaberry, volver a un 690 mejorado como también lo dijo Lacalle.

Nuestra salud en seguridad sigue inestable y muchos quieren la intervención militar, olvidan que los ejércitos son para la guerra y los quieren en tareas policiales y aduaneras.

No conviene entremeter roles. A retornar al poder para recuperar salud ciudadana.

La Venezuela de Trump

Ricardo ACOSTA CALVO
Periodista



Hay momentos en que el tiempo permite volver sobre una discusión y mirar los hechos desde otra perspectiva. Cuando Donald Trump decidió ir contra Nicolás Maduro, hubo quienes interpretaron que, finalmente, Estados Unidos había resuelto terminar con la dictadura venezolana y abrirle la puerta a una salida democrática. Desde la izquierda latinoamericana, la reacción fue casi automática: invasión, imperialismo, guerra, violación de la soberanía.

Nosotros planteábamos otra duda: ¿a Trump realmente le importaba la democracia venezolana? La pregunta no era menor. Porque una cosa era sacar a Maduro y otra, bastante diferente, desmontar el sistema de poder que el chavismo había construido durante años.

El 3 de enero de 2026, Maduro fue capturado y trasladado a Estados Unidos. Parecía que comenzaba una nueva etapa. Y comenzó, pero no exactamente como muchos imaginaban. Porque, cuando se definió quién quedaría al frente de Venezuela, no apareció María Corina Machado. Tampoco Edmundo González. Quedó Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro. Es decir, alguien que formaba parte del mismo gobierno que Estados Unidos había señalado como ilegítimo.

Ahí apareció la primera gran contradicción. Si el objetivo era devolverles Venezuela a los venezolanos, ¿por qué Washington terminó aceptando como interlocutora a una dirigente perteneciente al mismo aparato que pretendía combatir? La respuesta comenzó a verse en los meses siguientes. Washington dejó de hablar solamente de Maduro y comenzó a hablar cada vez más de negocios, inversiones y producción. Trump, además, fue bastante claro: Venezuela todavía no estaría preparada para celebrar elecciones. Mientras tanto, elogió públicamente la gestión de Delcy Rodríguez.

Una situación difícil de imaginar si realmente estuviéramos frente a una transición democrática en marcha. Porque una democracia no necesita solamente que caiga un dictador. Necesita elecciones libres. Necesita instituciones. Necesita garantías. Necesita oposición. Necesita que quienes fueron perseguidos puedan competir en igualdad de condiciones. Y, sobre todo, necesita que el pueblo pueda decidir quién gobierna. Eso todavía no ocurrió.

Lo que sí ocurrió fue algo bastante más pragmático. Estados Unidos avanzó sobre el principal recurso económico venezolano y alcanzó acuerdos energéticos de enorme magnitud con el gobierno que quedó después de Maduro. No hace falta ser demasiado perspicaz para entender que Washington encontró un interlocutor con el que puede negociar. Y allí aparece una diferencia fundamental entre la política de Trump y la lectura que muchos hicieron de ella.

Trump no parece moverse por principios ideológicos. No es un cruzado de la democracia. Es un hombre de negocios que entiende la política internacional como una negociación permanente. Si hay que enfrentar a Maduro, lo enfrenta. Si después hay que negociar con quienes estaban junto a Maduro, negocia. Si Delcy Rodríguez sirve para garantizar estabilidad y abrir la economía venezolana, entonces puede convertirse en una interlocutora válida.

No hay contradicción para Trump. La contradicción es para quienes quisieron explicar aquella operación solamente desde la defensa de la democracia. Y en ese punto también aparece María Corina Machado. Durante años fue presentada como la gran figura de la oposición democrática venezolana. Su lucha contra el chavismo fue, sin dudas, una de las más firmes. Pero hoy no es ella quien conduce la transición.

Eso debería obligarnos a revisar algunas certezas. Porque quizás María Corina fue útil para construir legitimidad política internacional contra Maduro, pero otra cosa muy diferente era que Trump estuviera dispuesto a entregarle el poder. Y esa diferencia hoy resulta evidente.

Mientras tanto, Venezuela sigue esperando. Maduro ya no está, pero muchas de las estructuras que sostuvieron al chavismo continúan funcionando. Y los venezolanos siguen esperando algo bastante más sencillo que todos los acuerdos internacionales: poder elegir libremente a su gobierno.

Lo curioso es que quienes durante años denunciaron cualquier movimiento de Estados Unidos sobre Venezuela como una guerra imperialista ahora parecen haber perdido el interés. La izquierda latinoamericana hablaba permanentemente de Maduro. Hablaba de soberanía. Hablaba de imperialismo. Hablaba de intervención. Hoy, en cambio, Trump negocia directamente con el gobierno venezolano. Y ese gobierno está encabezado por quien fue vicepresidenta de Maduro. Silencio.

¿Por qué?

Quizás porque el relato se volvió incómodo. Si aquello fue una guerra contra Venezuela, ¿qué es entonces esto? Si Trump era el enemigo imperialista que



quería destruir al chavismo, ¿cómo se explica que ahora negocie con parte del mismo aparato que gobernaba junto a Maduro? Y si todo aquello tenía como objetivo recuperar la democracia venezolana, ¿por qué todavía no hay elecciones? Son preguntas simples, pero nadie parece demasiado interesado en responderlas. Tampoco conviene confundirse. Que Maduro haya sido sacado del poder no convierte automáticamente a Venezuela en una democracia. Que Estados Unidos haga negocios con Caracas tampoco convierte al chavismo en democrático. Y que Trump haya conseguido desplazar a Maduro tampoco significa que haya querido entregarles Venezuela a la oposición y a los venezolanos.

Tal vez esa haya sido la gran confusión: pensar que sacar al hombre significaba cambiar el sistema. No necesariamente. Maduro fue el rostro de una estructura mucho más grande que él. Hoy ese rostro está fuera del país. La estructura, en buena medida, sigue allí. Y quienes ayer gritaban contra una supuesta guerra ahora prefieren no mirar demasiado. Tal vez porque la realidad terminó siendo bastante más incómoda que el relato.

Trump no necesitaba salvar a Venezuela. Necesitaba resolver un problema. Lo resolvió. Ahora negocia con quienes quedaron. Y mientras todos discuten quién ganó la partida, los venezolanos siguen esperando lo único que todavía no llegó: la democracia.

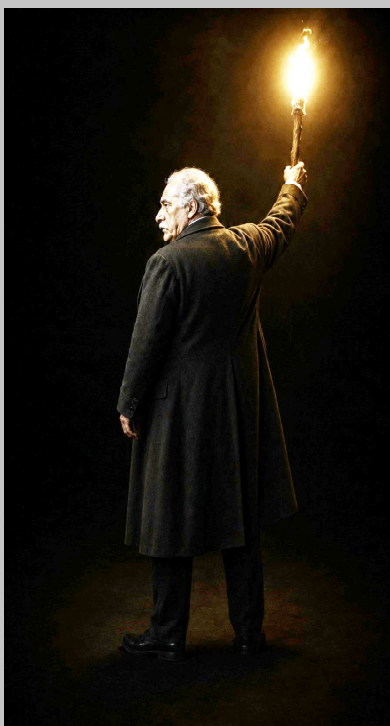


Eduardo IRIGOYEN
Periodista

La visita de un grupo de dirigentes políticos católicos al cardenal Daniel Sturla, presentada como un encuentro de «legisladores católicos de todos los partidos» para conversar sobre la próxima visita del papa León XIV, puede ser un episodio menor de la política cotidiana. Pero también puede servir para volver a discutir una cuestión más profunda: ¿qué lugar debe ocupar la religión en una República laica?

No se trata de juzgar las creencias personales de quienes participaron. Cada uno tiene derecho a ser católico, judío, musulmán, ateo o cualquier otra cosa, y a reunirse con quien desee. La libertad de conciencia incluye eso: la libertad de creer y también la de no creer.

El problema comienza cuando quienes ejercen responsabilidades públicas se agrupan políticamente a partir de una identidad religiosa y se reúnen con la jerarquía de una confesión que sostiene doctrinas sobre asuntos que son, al mismo tiempo, materias de legislación y derechos individuales. No afirmo que de ese encuentro haya surgido una decisión política determinada; la información difundida dice solamente que se habló de la visita papal. Pero una fotografía puede no probar una conspiración y, sin embargo, plantear una pregunta legítima: ¿qué quiere hoy la Iglesia Católica de la política uruguaya?



¿Qué esperan determinados

dirigentes de la Iglesia? ¿Hasta dónde llega la influencia religiosa sobre quienes tienen la responsabilidad de hacer leyes para creyentes y no creyentes?

No es una pregunta contra las personas. Es una pregunta sobre el poder.

CREER NO ES LEGISLAR Una cosa es la libertad religiosa y otra muy distinta es el poder religioso. La Iglesia tiene perfecto derecho a sostener que la vida humana debe protegerse desde la concepción, que el aborto y la eutanasia son moralmente inaceptables, o que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Son posiciones doctrinarias y tiene todo el derecho a defenderlas e intentar convencer a la sociedad.

Lo que no puede pretender es que esas convicciones se conviertan automáticamente en obligaciones jurídicas para quienes no las comparten. Porque los dogmas no se votan: se creen. Una ley, en cambio, debe poder ser discutida, argumentada, modificada y eventualmente derogada. Su fundamento debe poder exponerse ante ciudadanos que profesan distintas creencias o ninguna. Una revelación sobrenatural posee una autoridad que no depende de una votación ni de una demostración racional, y por eso no puede constituir el fundamento último de las obligaciones que el Estado impone a todos.

Una sociedad democrática puede convivir con ciudadanos que creen en milagros o revelaciones, pero no puede transformar esas creencias particulares en criterios de verdad para toda la República.

El ciudadano puede tener fe. El Estado no.

EL PROBLEMA NO ES LA IGLESIA: ES EL CLERICALISMO La Iglesia tiene derecho a expresarse, organizarse y presionar políticamente, como lo hacen sindicatos, empresarios o partidos. El problema aparece cuando esa influencia pretende transformarse en autoridad privilegiada sobre el Estado o sobre las conciencias.

Ese es el viejo problema del clericalismo.

No es anacrónico hablar de laicidad, anticlericalismo o separación entre Iglesia y Estado. Los tiempos cambiaron, Uruguay cambió, el batllismo cambió, la

El Estado no reza

ciencia y las costumbres cambiaron. Pero un dogma continúa siendo un dogma aunque se presente con una estética moderna. La Iglesia puede modificar su lenguaje, el marketing y su estrategia, pero aquello que constituye un dogma no se transforma en una verdad democrática porque haya cambiado el modo de comunicarlo. No se vota, no se modifica por una mayoría circunstancial: se cree. Por eso el Estado debe mantener una distancia prudente, firme y saludable.

¿QUÉ BATLLISMO QUEREMOS RECORDAR? Hubo batllistas creyentes que ejercieron responsabilidades públicas sin traicionar sus convicciones religiosas, pero utilizar solo esos ejemplos sería contar una historia incompleta. Junto a ellos estuvieron otros que acompañaron a José Batlle y Ordóñez en la lucha contra el clericalismo y contra la pretensión de convertir verdades religiosas en autoridad social y política. Batlle no combatió al ciudadano que cree, sino al dogma cuando pretendía gobernar la conciencia y condicionar al Estado.

Don Pepe llegó a considerar la religión católica «absurda y grotesca».

Domingo Arena lo describió de una manera todavía más contundente. Al recordar las ideas de Don Pepe escribió que no podía soportar «ninguna religión positiva, sobre todo la católica», porque entendía que contribuían a «nublar la conciencia del pueblo» y a llenarla de prejuicios.

Esto no convierte al batllismo en una doctrina atea, sino en una defensa de la libertad absoluta de conciencia, que vale tanto para quien cree como para quien no.

Por eso tampoco compro el argumento de algunos dirigentes colorados que dicen que no quieren «mimetizarse con los marxistas» y que, frente a los problemas del Uruguay, necesitamos «más espiritualidad y más fe».

¿En serio?

¿Más fe para enfrentar la pobreza?

¿Más espiritualidad para resolver la inseguridad?

¿Más revelaciones para mejorar la educación?

¿Más oración para combatir el narcotráfico?

¿Más creencias sobrenaturales para reconstruir una sociedad fragmentada?

¿Acaso un exorcismo o una cadena de oración para mejorar la salud mental?

Eso no es una alternativa al marxismo.

Es otra forma de abandonar la razón.

UNA VIEJA BATALLA QUE SIGUE SIENDO NUESTRA No me interesa convertir la visita al cardenal en un escándalo, sino que no perdamos la capacidad de hacer preguntas incómodas. Que un legislador sea católico, vaya a misa o se reúna con el cardenal no me preocupa. Lo que me preocupa es que algún día, por temor a contrariar a una confesión religiosa o a perder el voto de sus fieles, termine subordinando su decisión pública a una doctrina que solo una parte de la sociedad acepta. Ahí está la frontera.

Defenderla no es anticatolicismo: es republicanismo. No es intolerancia: es laicidad. No es negar la libertad religiosa, sino defenderla, porque esa libertad solo existe plenamente cuando ninguna religión dispone del Estado para proteger sus verdades particulares.

Sigo estando del lado de Don Pepe: no contra el creyente, sino contra quien quiera convertir su creencia en obligación; no contra la fe, sino contra el poder político del dogma; no contra la Iglesia como institución libre, sino contra cualquier pretensión clerical de colocarla por encima de la conciencia individual y de la soberanía republicana.

El batllismo que reivindicó eligió la razón, la libertad de conciencia, la educación, la ciencia y la autonomía del individuo frente a cualquier dogma. No necesitamos volver al Uruguay de hace cien años, sino conservar la valentía de discutir los dogmas, vengamos de donde vengamos.

Parafraseando a un senador católico y chicotacista: faltan huevos.

Los tiempos cambian.

Los dogmas no necesariamente.

¡Viva la libertad de conciencia!

¡Viva la República!

¡Viva Batlle!

Un enemigo silencioso

Daniel MANDURÉ
Convencional del PC.
Fue Edil por Montevideo



Vivimos días enteros enfrascados en discusiones bizantinas que ocupan titulares durante semanas, que muchas veces terminan cansando y que poco le importan al ciudadano. Se generan debates duros e interminables cruces políticos. Con un desgaste de energía y de valioso tiempo donde cabe preguntarse: ¿qué fue lo que aportaron? Sin embargo, hay problemas que, siendo más graves, parecen estar condenados a una silenciosa indiferencia. Que no generan debate ni ocupan primeras planas, salvo cuando se anuncia una fatalidad. Que importan en el discurso, en la promesa de medidas que nunca se toman o cuando se produce una tragedia, pero que se reflejan poco en los recursos que se le destinan y en las acciones concretas.

Hay enemigos que se ven venir. Otros que se anuncian. Con los que se puede preparar defensas y enfrentarlos a tiempo. Pero existen algunos que van avanzando en silencio. Estamos hablando de la salud mental.

Uruguay lleva demasiado tiempo conviviendo con ese enemigo silencioso y traicionero. La salud mental no debe ser un problema del que hablemos cuando ocurre una tragedia. Debe formar parte de políticas permanentes, de la infancia y adolescencia, de la educación, de las políticas de empleo, de programas del adulto mayor, de la lucha contra las adicciones y de la protección social.

El enemigo cambia de forma: Hay nuevas realidades que no podemos ignorar: el creciente consumo problemático de drogas, la soledad, pérdida de vínculos, ansiedad, depresión, violencia, hasta la influencia de las redes sociales.

Uruguay tiene uno de los sistemas institucionales más sólidos de América Latina. Tiene una cobertura sanitaria buena y una larga tradición en políticas sociales. Sin embargo, una tasa de suicidios extraordinariamente elevada.

Los números nos obligan a pensar. En 2025 se registraron 668 suicidios. Casi dos personas por día. Una tasa de 19.16 por cada 100.000 habitantes. En 2024 el grupo etario de 20 a 24 años registró una tasa de suicidio de 33.2 cada 100.000, la más alta para esa franja etaria. Entre los adultos mayores fue de 38.2 entre 85 y 89 años y de 37.6 de más de 90 años.

La tasa de suicidios representa hoy casi el doble del promedio de América Latina. Solo nos gana Guyana y Surinam en cantidad de suicidios. Superamos con holgura los registros de los países vecinos. Mientras en Uruguay el promedio ronda los 20-21 puntos, en Argentina promedia los 8, Chile los 9 y Brasil los 7. La tasa de suicidios de Uruguay es de más del doble del promedio del planeta.

Con una fuerte disparidad por género: 79% a hombres frente a 21% en mujeres. Aunque la cifra es inversa cuando hablamos de intentos de suicidios, aquí la cifra en el caso de las mujeres es de dos a cuatro veces mayor que en los hombres.

Hay una contradicción difícil de explicar, incluso para los expertos, con un país caracterizado por un aceptable índice de desarrollo humano, estabilidad democrática y adecuado bienestar socioeconómico comparado con otras sociedades. Pero por otro lado está padeciendo una muy crítica situación relacionada a la salud mental y al aislamiento social.

El problema atraviesa generaciones y condición económica. Durante mucho tiempo se veía la salud mental como algo que podía esperar, como algo menos urgente que otra de carácter físico. Como si la depresión o la angustia pueda esperar, como que se pudiera controlar. Pero la crisis emocional no funciona con los tiempos administrativos del Estado. El sufrimiento mental no sabe adaptarse a una lista de espera. Cuando hablamos del suicidio la cuestión adquiere una dimensión aún mayor. Hace poco tiempo se informaba por parte del gobierno que 30 000 usuarios de la salud esperaban atención psiquiátrica en ASSE.

Abundan los diagnósticos, somos especialistas en eso.

Uruguay tiene planes, leyes, estrategias y programas. Existe una ley de salud mental. Un Plan Nacional. Se acaba de iniciar una campaña televisiva. Existen estrategias de Prevención de Suicidio. Se creó ahora la denominada «Acción País» por la Salud Mental. Pero algo sigue fallando porque somos por lejos el país con mayor tasa de suicidios. Pero la gran diferencia es entre tener una política escrita y tener una política que se ejecuta. Entre el anuncio y la aplicación concreta. Entre reconocer el problema y el enfrentarlo de verdad.

Dicho de otra manera, si verdaderamente la salud mental es una prioridad, se debería ver reflejada en recursos humanos, recursos económicos, infraestructura, tratamientos, prevención, seguimiento y una fuerte presencia territorial.

Se necesitan equipos interdisciplinarios actuando en forma inmediata, centros de atención suficientes y capacitados, educación, políticas sociales concretas y con respuestas rápidas cuando alguien da señales de necesitarla.

El gobierno asignó recursos para salud mental. Son acciones positivas, pero totalmente insuficientes dada la gravedad del problema.

Uruguay destina, más allá de algunas partidas extraordinarias, no más del 3% del presupuesto total de la salud a la salud mental, una cifra insuficiente frente a la gravedad del problema y a las recomendaciones internacionales. De acuerdo con estas recomendaciones los países deberían destinar como mínimo entre un 5% y un 10% a dicha problemática.

Nunca estuvimos tan conectados como ahora y paradójicamente quizás nunca hubo tanta soledad. Tal vez esta sea una de las grandes batallas de nuestro tiempo: conseguir

SALUD MENTAL: ESE ENEMIGO SILENCIOSO

En Uruguay, el suicidio se cobra casi dos vidas por día. Detrás de cada número, hay una historia que duele en silencio.

No se trata solo de estadísticas.
Se trata de personas.

ESCUCHAR
A TIEMPO
PUEDE SALVAR
UNA VIDA.

HABLEMOS, ESCUDEMOS, ACOMPAÑEMOS.
LA SALUD MENTAL IMPORTA, SIEMPRE.



que nadie tenga que enfrentar en soledad el momento en el que la vida pueda comenzar a perder sentido.

No alcanza con preguntarnos ante hechos consumados porque alguien dejó de encontrarle sentido a la vida. Como sociedad debemos preguntarnos que estamos haciendo para revertir esa situación. Allí tal vez esté el corazón del problema.

El Estado tiene responsabilidad y la sociedad toda también.

La familia cumple su papel, la escuela y el liceo, los medios de comunicación, los clubes deportivos y las empresas.

No podemos conformarnos con ser un país que reconoce el problema. Tenemos que aspirar a ser un país que enfrenta el problema con decisión.

Albert Camus escribió que el suicidio constituía un gran problema filosófico fundamental. Quizá de esa reflexión pueda surgir la pregunta incómoda: ¿Qué hace que una persona llegue a sentir que vivir dejó de ser una posibilidad?

En el mito de Sísifo publicado en 1942, como decía, Camus afirma que: «el suicidio es un problema filosófico realmente serio»

No estaba haciendo un estudio médico ni psicológico del suicidio. Estaba formulando una pregunta mucho más profunda: ¿vale la pena vivir cuando la existencia parece carecer de sentido?

El ser humano necesita encontrar un sentido, un orden, una explicación, pero el mundo no necesariamente se los ofrece.

Allí aparece Sísifo.

Condenado por los dioses a empujar eternamente una enorme piedra hasta la cima de una montaña, para verla caer y comenzar otra vez. Subir, caer, volver a subir, volver a caer. Así, una y otra vez, en forma indefinida.

Tal vez el caso de Sísifo representa el peso que lleva sobre la espalda muchas de nuestras vidas contemporáneas.

Y lo peor es que muchas veces esa pesada mochila la llevamos en medio de la soledad, la angustia, la depresión, las adicciones y sin tener a alguien que escuche o pregunte. Sísifo, a pesar de todo no abandona la montaña.

La propuesta de Camus consiste en asumir con lucidez la existencia y sobre todo rebelarse contra todo aquello que parece condenarnos a la desesperanza. La respuesta no puede ser nunca escapar de la vida. Sino vivirla con conciencia, intensidad y dignidad. Por ello esa imagen mitológica adquiere una enorme actualidad.

Porque cuando hablamos de salud mental no estamos hablando solamente de enfermedades, tratamientos o estadísticas.

Estamos hablando de vínculos, de pertenencia, de esperanza.

Y aquí Camus dialoga sin saberlo con uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Nunca estuvimos tan conectados como ahora y paradójicamente nunca hubo tanta gente sola.

Por eso la pregunta de Camus puede adquirir una dimensión diferente cuando lo trasladamos al terreno de la salud pública. Y la respuesta no puede ser solamente un diagnóstico. No puede ser solo una lista de espera. No puede ser solamente una campaña de publicidad. No puede ser solo elaborar informes.

Tiene que haber presencia, acompañamiento, saber escuchar, prevenir, fortalecer vínculos y llegar a tiempo.

Seguramente desde el sistema político no se tenga la respuesta absoluta, pero si puede hacer algo. Puede contribuir con medidas que ayuden a detectar señales, prevenir, anticiparse, acercar ayuda, reducir esperas, financiar tratamientos, otorgar más recursos económicos y humanos, acompañar familias.

Debe ser una gran prioridad nacional.

Esta batalla no admite de mezquindades políticas. No admite burocracia. No admite indiferencia. Ni el lamento frente al hecho consumado. No podemos esperar al próximo suicidio para hablar del tema y concretar medidas.

El suicidio es un fenómeno multicausal. Hay dos fenómenos que tampoco podemos ignorar: el consumo problemático de drogas y el impacto de las nuevas tecnologías. No porque estas problemáticas expliquen por sí solas al suicidio. Ello sería una simplificación peligrosa e irresponsable, pero si verlos como factores que profundizan vulnerabilidades que ya existen. Quien consume para escapar de algo termina profundizando ese fantasma del que quiere escapar.

Con la tecnología y las redes sociales pasa algo que debe preocupar. No se trata de demonizar la tecnología y todos los aspectos positivos que trae consigo. Pero si de visibilizar sus debilidades. Como esa máquina de comparación permanente con el otro, donde todos son lindos, felices, exitosos, geniales, con una vida ejemplar y perfecta. Frente a esa vidriera difícil de competir muchos individuos con alta vulnerabilidad se llegan a preguntar porque mi vida no se parece a ninguna de ellas. Esa comparación se termina convirtiendo en frustración. La frustración en aislamiento. El aislamiento en angustia y la angustia en desesperanza.

Vivimos tiempos de una gran comunicación, pero también de mayor soledad. Con más posibilidades de contactos virtuales, pero de mayor aislamiento interpersonal. En tiempos de una gran inmediatez y con estímulos desmedidos.

Una sociedad donde abunda el que todo lo sabe, todo lo pide, todo lo exige y todo lo juzga. Siempre implacable con el otro. Tiempos de violencia. De mucha gente rodeada de otros, pero sumergida en la soledad. Llena de halagos y de abundantes «me gusta» en redes, pero vacía.

Al diseñar políticas de salud deberíamos preguntarnos, además: ¿qué sociedad estamos construyendo?

Albert Camus nos abre una puerta extraordinaria, nos muestra a Sísifo empujando su piedra una y otra vez. Nosotros tenemos otra tarea: Que nadie tenga que empujar solo la suya.

**Eduardo FAZZIO**

Dr. En Medicina y Técnico Veterinario. Licenciado en Negocios Internacionales e Integración. Docente Universitario. Fue Edil por Montevideo

El desafío del Partido Colorado para los próximos años es volver a crecer. Y no solamente por nosotros: el espacio no frenteamplista necesita que recuperemos electores a los que el Partido Nacional no llega. Una mayoría nueva será mayor si sus componentes consiguen expandirse. Ante quienes han sugerido una fusión entre blancos y colorados, la réplica es si esa estructura ayudaría a crecer o terminaría achicándolo. Quienes impulsan esa integración recurren a un antecedente: el Partido Comunista y el Partido Socialista fundaron el Frente Amplio, conservaron sus organizaciones y continuaron existiendo. Pero vale la pena mostrar qué suerte corrieron los fundadores que ingresaron desde posiciones menores y cuánto electorado conservaron.



LA EXPERIENCIA DEL FRENTE AMPLIO La fotografía de 1971 lo ilustra. El FIDEL (PC) reunió un tercio de los votos del nuevo Frente Amplio y, junto al PS, la izquierda marxista histórica alcanzaba alrededor del 45%. El PDC de Juan Pablo Terra representaba un 20%, mientras las corrientes provenientes del Partido Nacional superaban el 23%. El contingente de origen colorado encabezado por Zelmar Michelini y Hugo Batalla rondaba el 10%. Michelini contribuyó a la convocatoria, pero su corriente no ocupó el centro de gravedad electoral.

La evolución posterior resulta ilustrativa. El PDC, con unos 61.000 votos y Terra electo senador, obtuvo en 1984 un solo diputado. El espacio de Enrique Erro, con unos 70.000 votos en 1971, dejó de existir. El Movimiento Blanco Popular y Progresista de Rodríguez Camusso terminó rebautizado tras la dictadura como Movimiento Popular Frenteamplista.

La 99 aporta el matiz necesario. Tras el asesinato de Michelini, Hugo Batalla reconstruyó ese espacio como Partido por el Gobierno del Pueblo y en 1989 dejó el Frente Amplio junto al PDC para crear el Nuevo Espacio: cerca del 9% nacional, dos senadores y nueve diputados. Mostró que la autonomía era recuperable, aunque cinco años después el espacio se fragmentó. Batalla se aproximó al Partido Colorado e integró la fórmula con Sanguinetti; Rafael Michelini continuó con el Nuevo Espacio, cuya trayectoria desembocó en el actual Espacio Socialdemócrata Amplio. En 2024 fue primer suplente de Constanza Moreira en una lista al Senado encabezada por Óscar Andrade.

Las trayectorias fueron distintas, pero dejan una enseñanza común: la preservación de una organización política no garantiza conservar un electorado. Dentro de una estructura común aparecen nuevas pertenencias e incentivos que pesan más que cualquier garantía estatutaria. **LA ASIMETRÍA IMPORTA** Esta experiencia merece considerarse ante un lema común entre blancos y colorados. Este constituiría un partido a efectos electorales, con autoridades, carta orgánica, programa y candidatura presidencial única. La competencia que hoy se desarrolla dentro de cada partido se trasladaría a esa estructura, debilitando el mecanismo con que cada colectividad moviliza militantes y renueva liderazgos.

La asimetría de partida es considerable. En octubre de 2024 el Partido Nacional obtuvo 655.426 votos y el Partido Colorado 392.592. A eso se suma una implantación territorial mucho mayor: en 2025 el Partido Nacional ganó directamente trece intendencias y un candidato nacionalista una decimocuarta, Salto, bajo el lema Coalición Republicana, presentado solamente en Montevideo, Canelones y Salto. A ello se agrega la gravitación de Luis Lacalle Pou. El Partido Colorado ingresaría,

Para construir una mayoría mayor, el PC tiene que crecer

por tanto, en minoría, con restricciones propias más allá de las intenciones de quienes diseñen el acuerdo.

Ya existe un antecedente parcial. En las departamentales de 2025, en Montevideo Martín Lema obtuvo 291.291 votos y Virginia Cáceres 39.422; en Salto, Carlos Albusu reunió 36.664 y Marcelo Malaquina 14.229. En Salto la Coalición Republicana obtuvo la Intendencia y la candidatura colorada conservó una votación relevante dentro del lema común. Sin embargo, el sector de Malaquina anunció en abril de 2026 su alejamiento de la gestión, alegando falta de participación en la construcción política del gobierno. Una experiencia no establece una tendencia, pero muestra que conservar una expresión electoral dentro del lema común no elimina la asimetría entre sus componentes.

LOS INCENTIVOS TAMBIÉN CONSTRUYEN PARTIDOS En los departamentos ese fenómeno sería especialmente intenso. Donde el candidato blanco tenga posibilidades ciertas de ganar la Intendencia y el colorado parta muy atrás, será racional para un dirigente colorado con aspiraciones de edil, diputado o intendente acercarse al primero. Esa relación construirá compromisos, recursos y votos que incidirán en las sucesivas candidaturas a Diputados y en los alineamientos nacionales. Repetido en varias elecciones, podría modificar profundamente el centro de gravedad partidario.

A esto se agrega una diferencia poco discutida: el tiempo electoral de un dirigente no siempre coincide con el tiempo histórico de un partido. Para quien debe resolver su candidatura en la próxima elección, una estructura común puede tentarlo con oportunidades inmediatas: acercarse al mejor posicionado, aumentar sus posibilidades de integrar gobierno o acceder a espacios que un Partido Colorado debilitado quizá no pueda ofrecerle. Una decisión perfectamente racional para la carrera política individual puede resultar perjudicial para la supervivencia electoral de su partido. No hace falta atribuir intenciones mezquinas a nadie: los incentivos personales de corto plazo y las necesidades partidarias de largo plazo pueden divergir.

El Partido Colorado tiene que mirar más lejos. Una colectividad con historia debe preguntarse dónde quiere estar dentro de diez o veinte años. Si acepta una arquitectura que reduce los incentivos para construir votos, candidaturas y liderazgos propios, puede ir perdiendo aquello que asegura su continuidad. Los dirigentes deben resolver legítimamente su futuro político; la conducción partidaria debería asegurar también el futuro del partido y que nuevas generaciones encuentren en él un espacio desde el cual disputar poder y representar ideas.

Dentro de un eventual lema común, las corrientes blancas seguirían girando en torno a sus intendencias y liderazgos. Las coloradas podrían terminar compitiendo entre ellas por relacionarse mejor con ese centro de poder. Cuando para crecer personalmente resulta más conveniente acercarse al polo mayor que hacer crecer al propio partido, la autonomía empieza a vaciarse antes de desaparecer jurídicamente.

VOLVER A CRECER La autonomía colorada adquiere así un sentido más ambicioso que preservar una identidad. Un Partido Colorado en reconstrucción puede volver a disputar electores, ofrecer una alternativa liberal y social diferenciada, formar nuevos dirigentes y reconstruir presencia territorial. Puede llegar a octubre con votos propios y converger en noviembre en una mayoría más amplia. Para construir una mayoría nueva necesitamos aumentar los sumandos antes de preocuparnos por asegurar la suma.

La evolución del PCU dentro del FA ofrece el contraste adecuado: ingresó en 1971 con unos

100.000 votos, una organización militante y una identidad ideológica consolidada. Su supervivencia muestra cuánto puede preservarse una organización dentro de una construcción mayor; para el Partido Colorado, en cambio, resulta más instructivo observar a quienes ingresaron con menor fortaleza. Ya hemos visto cómo les fue.

El Partido Nacional ya representa un espacio propio; nuestra tarea es reconstruir un electorado colorado y una razón política diferenciada para representar a quienes no representa. El Partido Colorado tiene una tradición reformista que puede recuperar si confía en su capacidad de crecer. La cuestión decisiva excede entonces la garantía de que podamos seguir llamándonos colorados: consiste en que dentro de veinte años siga siendo necesario construir votos, dirigentes y poder colorados. Nuestro aporte a una nueva mayoría será mayor si llegamos a

ella como un partido que volvió a crecer que si conseguimos lugares dentro de una estructura que aprendió a prescindir de nosotros.

A río revuelto

Guzmán A. IFRAN

Contador Público. Fue diputado por Montevideo y Coordinador de la Opp



La crisis hídrica de 2023 debería haber dejado una enseñanza difícil de relativizar. Uruguay, un país que durante décadas asumió el acceso al agua potable como una fortaleza casi natural de su infraestructura pública, descubrió de manera abrupta que el abastecimiento de más de la mitad de su población descansa sobre un sistema vulnerable, excesivamente concentrado y expuesto a fenómenos climáticos cada vez más severos. La discusión, por tanto, no debería reducirse a qué obra pertenece a qué gobierno, sino a cómo construir una arquitectura hídrica capaz de resistir sequías prolongadas, fallas operativas y contingencias ambientales sin volver a colocar al área metropolitana al borde del colapso. Precisamente por eso resulta difícil comprender que una cuestión de semejante dimensión estratégica haya vuelto a quedar atrapada en la lógica pendular de nuestra política, sustituyendo continuidad por reinicio y acumulación por ruptura.



El Proyecto Arazatí, originalmente denominado Neptuno, había avanzado durante años precisamente sobre una idea que sigue siendo central para la seguridad hídrica nacional. No se trataba simplemente de agregar más agua al sistema existente, sino de incorporar una segunda fuente de abastecimiento para Montevideo y el área metropolitana. La iniciativa fue recibida por OSE en 2021, a través de estudios de factibilidad, monitoreos de calidad del agua, decisiones del Directorio, un llamado internacional, adjudicación y sucesivas instancias administrativas, técnicas, ambientales y judiciales. En noviembre de 2022 OSE aprobó su factibilidad y resolvió licitarlo, en agosto de 2023 lo adjudicó y el 23 de enero de 2025 se firmó finalmente el contrato. El diseño preveía captar agua del Río de la Plata en Arazatí, construir una planta potabilizadora, disponer de una reserva de agua dulce para atravesar episodios transitorios de salinidad y conducir el agua tratada hasta el sistema metropolitano. En su configuración final podía producir hasta 200.000 metros cúbicos diarios. Su virtud estructural era evidente. Frente a un sistema históricamente dependiente del Santa Lucía, Arazatí introducía diversificación geográfica, operativa y de fuente. No resolvía todos los problemas, pero agregaba algo que Casupá no agrega, redundancia real.

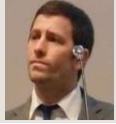
Es cierto que Arazatí no estaba exento de cuestionamientos. Hubo objeciones sobre salinidad, bromuros, eventuales floraciones de cianobacterias, diseño del reservorio, costos y modalidad contractual. La actual administración utilizó parte de esos argumentos para justificar su relocalización y reformulación. Pero una política de Estado no exige aceptar sin revisión lo hecho por el gobierno anterior. Exige, precisamente, preservar lo valioso, corregir lo corregible y evitar que cada alternancia electoral vuelva a colocar al país en la casilla de salida. Si existían aspectos técnicos que debían perfeccionarse, correspondía perfeccionarlos. Si el reservorio debía modificarse, correspondía modificarlo. Si había cláusulas contractuales inconvenientes, correspondía renegociarlas. Lo que resulta mucho más discutible es abandonar el corazón estratégico de la solución, que consistía en dotar al área metropolitana de una fuente alternativa

al Santa Lucía. De hecho, la propia documentación técnica de OSE había señalado que Arazatí y Casupá respondían a riesgos diferentes. Casupá puede reforzar la reserva de agua bruta de Aguas Corrientes, pero no protege por sí sola frente a un eventual problema grave en la planta, en el sistema de aducción o en la propia cuenca. Arazatí sí aportaba una capa adicional de resiliencia. La opción elegida por el Frente Amplio vuelve ahora a quedar bajo escrutinio por razones que trascienden la disputa partidaria. La CAF, organismo que financia íntegramente la represa de Casupá mediante un préstamo de 130 millones de dólares, clasificó recientemente el proyecto como de riesgo ambiental y social alto. Esa categorización activó ocho salvaguardas vinculadas, entre otros aspectos, a evaluación y gestión de impactos, uso sostenible de recursos naturales, conservación de la diversidad biológica, prevención de la contaminación, patrimonio cultural, reasentamiento de población, condiciones laborales y equidad de género. No significa que CAF haya rechazado la obra, ni que esos impactos sean necesariamente imposibles de mitigar. Sí significa que estamos ante una intervención de gran complejidad, con consecuencias ambientales y sociales



que requieren controles, compensaciones y planes específicos. El embalse proyectado ocupará alrededor de 2.127 hectáreas y transformará de manera permanente un territorio rural, su paisaje, sus ecosistemas y la vida de quienes deberán ser desplazados o afectados por la obra. Todo ello para incrementar reservas dentro de la misma cuenca de la que ya depende el sistema metropolitano. Casupá puede aportar aproximadamente 118 millones de metros cúbicos adicionales de almacenamiento y mejorar la capacidad de respuesta ante sequías severas, pero sigue apostando a fortalecer la dependencia de una única arquitectura hídrica en vez de diversificarla.

Uruguay debería aprender a distinguir entre alternancia democrática y amnesia institucional. Los gobiernos cambian, pero las infraestructuras estratégicas sobreviven durante generaciones. Agua, energía, puertos, carreteras o telecomunicaciones no pueden concebirse como trofeos de una administración ni como territorios sobre los cuales el gobierno siguiente deba necesariamente imprimir su propia marca. Arazatí había acumulado años de estudios, decisiones, licitación, adjudicación y un contrato firmado. Podía y debía ser revisado, mejorado y eventualmente complementado con Casupá u otras soluciones, pero abandonar su lógica de segunda fuente significó renunciar a una oportunidad de construir verdadera redundancia en el abastecimiento. Después de 2023, volver a foja cero no fue una demostración de prudencia, sino una decisión política cuyo costo se mide en tiempo, incertidumbre y vulnerabilidad persistente. La seguridad hídrica debería haber sido una política de Estado. Y cuando el agua de casi dos millones de uruguayos depende de ello, empezar nuevamente nunca es empezar gratis.



Pablo CAFFARELLI
Abogado, Escribano. Escritor

El extraño arte de perder los estribos

Hay algo que empieza a preocupar más que los episodios de violencia que vemos casi diariamente: la naturalidad con la que empezamos a incorporarlos a nuestra vida. En el último clásico uruguayo hubo incidentes, aunque esta vez se dio una paradoja de no haber simpatizantes del equipo rival. Es decir, habíamos conseguido algo que parecía imposible en el fútbol —eliminar a las dos hinchadas— y, sin embargo, la violencia apareció igual. Para completar el absurdo, dentro del estadio se había preparado una especie de habitación ciega donde se ocultaba material prohibido para sacarlo durante el espectáculo. La imaginación puesta al servicio de la inconducta. Uno empieza a sospechar que el problema ya no es solamente que haya gente que vaya a buscar pelea, sino que estamos desarrollando una preocupante capacidad para fabricar las condiciones necesarias para encontrarla.

Mientras tanto, una estudiante de Medicina fue agredida sin una razón comprensible, en un episodio que deja esa sensación fatigosa de estar frente a algo que no sabemos explicar. También vimos a hinchas de Danubio enfrentarse con sus propios jugadores después de otra derrota, como si la frustración deportiva hubiera convertido al compañero de camiseta en enemigo. Y, en una escala mucho más grave, el asalto a mano armada al BROU de Pando nos

falta convertir esto en un diagnóstico médico para advertir que nos estamos acostumbrando a la velocidad, a la respuesta instantánea y a la gratificación permanente. Quizá por eso una derrota deportiva, una discusión, una frustración o una mirada equivocada comienzan a parecernos intolerables. Nos cuesta esperar, nos cuesta escuchar y, sobre todo, nos cuesta ese ejercicio antiguo y poco espectacular de pensar antes de actuar.

Durante siglos, además, tuvimos instituciones que ayudaban a contener esas pulsiones: la familia, la escuela, el club, el barrio, el trabajo, las comunidades religiosas. No eran perfectas —algunas tenían sus propios problemas, y vaya si los tenían—, pero funcionaban como espacios donde aprendíamos que vivir con otros implicaba aceptar límites, soportar frustraciones y entender que no todo lo que uno siente tiene derecho a convertirse inmediatamente en conducta. Hoy muchas de esas estructuras se han debilitado y el individuo quedó más expuesto a sus propias emociones, muchas veces sin herramientas para administrarlas. El resultado es una sociedad donde todos parecen tener voz, pero cada vez cuesta más encontrar interlocutores dispuestos a escuchar.

Quizá por eso la salida no esté en eliminar el conflicto, porque el conflicto forma parte inevitable de la condición humana, sino en aprender nuevamente a atravesarlo sin convertir al otro en un obstáculo que debe ser destruido. Hay que recuperar la curiosidad por saber qué le pasa al que tenemos enfrente, aun cuando nos resulte insoportable, porque detrás de muchas conductas que condenamos hay personas atravesadas por miedos, frustraciones, soledades y



ofreció una escena que parecía salida de una película del Lejano Oriente. Son hechos completamente diferentes, con protagonistas, responsabilidades y consecuencias distintas, y sería irresponsable meterlos a todos en la misma bolsa. Pero quizá tengan algo en común, interno a nosotros, como la creciente dificultad que estamos mostrando para administrar nuestras propias emociones y para aceptar que entre lo que sentimos y lo que hacemos debería existir, aunque más no fuera, un pequeño espacio de reflexión.

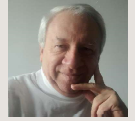
Vivimos hiperconectados y, al mismo tiempo, cada vez más solos. Tenemos cientos de contactos, grupos, seguidores y conversaciones abiertas, pero eso no necesariamente significa que tengamos a quién recurrir cuando la vida se pone difícil. Estamos permanentemente estimulados por pantallas diseñadas para evitar cualquier segundo de aburrimiento, recibiendo noticias, opiniones, imágenes, recompensas y pequeñas dosis de satisfacción inmediata. No hace

misericias que no justifiquen sus actos, pero que quizás ayuden a comprenderlos. La fraternidad, la solidaridad y la lucha contra la violencia pueden sonar hoy a palabras antiguas, casi ingenuas, pero probablemente sean más modernas y necesarias que nunca.

El gran problema quizás se resuelva con un pequeño truco: Cuando la rabia nos pida actuar, que podamos —todavía— regalarnos unos segundos para pensar qué vamos a hacer con ella. En ese pequeño intervalo, casi insignificante, puede estar la diferencia entre una sociedad que convive y una sociedad que simplemente aprende a sobrevivir.

Alemania y la «OTAN», en alerta permanente

Lorenzo AGUIRRE
Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Músico. Director de Orquesta



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente amenazó retirar más de 5.000 soldados del territorio alemán. El Canciller Friedrich Merz, al igual que líderes y representantes de la «Unión Europea», se encuentran molestos, más allá del tema respecto a imposición de aranceles por parte del mandatario estadounidense. Ahora, como si fuera poco, Alemania y Países Bajos deben asumir urgentemente el control territorial de la «Organización del Tratado del Atlántico Norte» («OTAN») en Estonia y Letonia, a efectos de reformular estructuras de cara a un posible enfrentamiento bélico con Rusia. Mientras, en forma paralela, Alemania vive acontecimientos internos realmente preocupantes, pues, por primera vez en la historia de la Alemania de posguerra, se presentó en las «Elecciones Estatales de Sajonia – Anhalt (para elegir a los miembros del Parlamento Regional) un candidato como Ulrich Siegmund, perteneciente al partido «Alternativa para Alemania» «AFD» - clasificado de extrema derecha por la «Oficina para la Protección de la Constitución» -, convirtiéndose, guste, o no, en indiscutible fuerza política.

El «Cuerpo General Germano – Neerlandés», con asiento en «Münster», Alemania, ha tomado el control táctico de operaciones aliadas en el Báltico, modificando los pilares de defensa de la «Alianza», enfocándose en particular en la reorganización de dispositivos para reforzar la capacidad de respuesta y estar alerta ante cualquier amenaza, especialmente en la frontera oriental de Europa, mientras Estonia, y Letonia, tendrán que sostener el equilibrio nacional a través de sus propias fuerzas armadas.

El nuevo «modelo» de la «Organización del Tratado del Atlántico Norte» se encuentra perfilado al «Código Alerta Permanente», con el mayor número de

suspendió la circulación de personal, vehículos, y mercaderías, como asimismo detuvo el tránsito ferroviario a lo largo de la línea con Finlandia – cinco pasos cerrados, entre ellos, Carella, Leningrado, San Petersburgo -, Estonia, y Letonia. ALEMANIA; «ASUNTOS INTERNOS» Como si la problemática narrada fuera poca, en forma paralela el gobierno de Alemania se encuentra autorizando el ingreso de diplomáticos talibanes, y ahora el Consulado General de Afganistán en Bonn, como la Embajada en Berlín, se encuentra dirigida por dichas figuras. El ministro Federal del Interior y Asuntos Internos de Alemania, Alexander Dobrindt – integrante de «Unión Social Cristiana de Baviera» (centroderecha) -, propuso llevar adelante 3 vuelos charter por mes, además de deportaciones individuales en viajes comerciales, para facilitar la expulsión de criminales a Afganistán.

Por su parte, el «Consejo de Seguridad» de la «Organización de las Naciones Unidas» aprobó la renovación de su misión en Afganistán – coordinar ayuda humanitaria y diálogo político, más allá de supervisar la situación en cuanto a derechos humanos – hasta junio de 2027, a efectos de afrontar la crisis humanitaria más grave en el mundo. Los talibanes, impusieron severas restricciones, transformando a Afganistán en un país totalmente devastado a partir de la toma de poder en Kabul, hace apenas 5 años.

Sería oportuno poner énfasis; para la realización de dichas deportaciones, Berlín, lo estaría haciendo a través de un régimen contra el cual, Alemania, luchó durante 20 años.



efectivos y potenciando la estructura de mando ante un posible accionar militar por parte de Rusia.

Según la «OTAN», se logró reducir el tiempo de reacción ante cualquier situación, de 17 horas, a tan solo 1 hora, pautando en relación a los programas una dinámica excepcional, jamás alcanzada, y con posibilidad de obtener en 52 minutos una respuesta múltiple y potente, en una escalada que, desde el mar, cuenta con un Sistema de Lanzamiento Vertical - más de 9000 celdas individuales -, mientras, en el aire, un solo bombardero B – 52 puede transportar hasta 20 misiles de crucero. Por lo expresado, en ataque coordinado, la fuerza aérea está en condiciones de lanzar cientos de miles de misiles guiados, antes de regresar a reabastecerse. Por otro lado, desde tierra, la artillería de cohetes tiene capacidad para disparar, en una hora, miles de proyectiles tácticos.

Por último, de acuerdo a la «Federación de Científicos Americanos», las tres potencias nucleares de la «OTAN» (Estados Unidos, Francia, y Reino Unido) mantienen operativas unas 4.000 ojivas - arsenal figurando como «Alerta Máxima» -, estando en condiciones de desplegar en menos de 30 minutos, cientos de misiles intercontinentales con carga atómica...

¿La dejamos por aquí...?

El secretario general de la «Organización del Tratado del Atlántico Norte», Mark Rutte, señaló que, los líderes de la «Alianza», de ahora en más asumirán nuevos contratos para defensa, los cuales serán por decenas de miles de millones en billetes verdes, y reiteró el compromiso de apoyo a Ucrania, más allá que, Eslovaquia, no tiene intención de contribuir financieramente ni «tratar el conflicto» de invasión. Por su parte, Rusia, está cancelando puestos de control fronterizos,



Según el Ministro del Interior, «al aceptar las repatriaciones, el gobierno de facto de Afganistán cumple con la obligación de readmitir a sus propios nacionales, de acuerdo al Derecho Internacional».

El Canciller alemán, Friedrich Merz, expresó: «no estamos tendiendo la mano a los talibanes, pues se trata de una cooperación necesaria a nivel técnico». Cabe reflexionar, si los hechos ocurridos, de alguna manera no están otorgando legitimidad a un régimen que viola derechos humanos, excluye a mujeres y niñas en cuanto a educación y trabajo, además, por supuesto, de sus derechos «AFD»; CAMINO AL PODER «Alternativa para Alemania» («AFD») – partido de ideología, nacionalismo alemán, euroescepticismo, conservadurismo, posición extrema derecha – se perfila como la agrupación más fuerte en las «Elecciones Estatales de Sajonia – Anhalt», y gran cantidad de inversores internacionales están dispuesto – ahora, más que nunca – a establecer nuevas fábricas, y empresas.

Friedrich Merz, ha manifestado escepticismo respecto a un proceso de ilegalización de «AfD», aunque no se opone a las demandas al señalar que, al menos, se podría ilegalizar el ala nacionalista, o quizá, «corregir algunas deficiencias de los últimos 15 años».

Más allá de previsible resultados, el rechazo a que «Alternativa para Alemania» llegue al Gobierno Federal forma parte de un alérgico pulso electoral evaluando hasta dónde, puede arribar el partido político de referencia, el cual ha establecido su discurso sobre inmigración, identidad nacional, y desaprobación a las políticas impulsadas desde Berlín, y Bruselas.



Gustavo GÓMEZ RIAL
Abogado. Escritor

Este titular no querrá justificarse como una errata más que se aprovecha del único fin de llamar la atención del lector. Lejos de ser una exageración, el título se quedaría corto ante el número de departamentos, dependencias, juntas locales, oficinas, reparticiones y divisiones administrativas del Estado que, desde lo municipal hasta lo nacional, y en reclamo de sus potestades, pretenderían hacer valer su libérrima facultad para decidir cómo hacer uso y elegir entre una cantidad variopinta de sistemas de Inteligencia Artificial. Un número, en total, seguramente mayor al de todas las concesiones de servicio y al de los tantos canales de cable locales que hayan sido habilitados en la historia departamental y nacional de la República.

Los lectores avezados ya sospecharán por qué se trae a colación a la TV por cable y a la satelital como ejemplo paradigmático de los reinos chacrales que han gozado de buena salud en perjuicio de una adecuada alineación para el



manejo eficaz de los distintos presupuestos involucrados. Ya inferirían que, en especial, se está aludiendo a esas potestades de uso libérrimo del dinero público que, como una mala herencia, estamos arrastrando desde 1935 cuando la Ley N° 9.515 fuera promulgada.

Si trasladásemos al terreno de la biología la situación creada desde entonces, podríamos decir que allá por 1935 aún éramos esa República campeona del mundo «unitaria y feliz» que intentaba resolver un conflicto que amenazaba dividir a la capital con el campo. Y todos querríamos creer que la mejor intención de los legisladores de aquel país orgulloso y próspero no era otra que la de dotar a las 19 administraciones municipales de las mejores herramientas posibles para garantizar el desarrollo en cada rincón de nuestro territorio.

Hablaba de biología porque el llamado órgano estatal, como consecuencia de una redacción legal desafortunada para la ley citada (y de posteriores abusos en su interpretación), no sólo vio cómo le crecían varias cabezas autónomas, sino que también nuevos estómagos, a los que se debía satisfacer así multiplicasen las mismas necesidades que el propio país, en su conjunto, ya estaba obligado a proveer desde su gobierno central para todos los uruguayos.

Los 119 departamentos de la inteligencia artificial

Como una especie de competencia ineficiente en la que un ojo quisiese demostrar que es capaz de escuchar tan bien o mejor que un buen oído.

Y es con ese vicio que, recurrentemente, nos venimos enfrentando de manera creciente desde hace más de 90 años. Y ya no es que alcance conque, de una buena vez, nos hagamos cargo de ponerle coto a esa rémora; o que nos convenzamos de que con sólo resolver ese tema bastaría para que no se repitan los excesos de poder propiciados durante las administraciones del Dr. Tabaré Vázquez al frente de la Intendencia de Montevideo, ni los insistentes abusos interpretativos promovidos desde su Junta Departamental (aunque, sin olvidarnos de las otras intendencias y juntas departamentales), sino que deberíamos reaccionar lo antes posible para prepararnos con dedicación e inteligencia frente al cúmulo de nuevos riesgos disruptivos e inevitables que se asoman y se aproximan. Sin embargo, sepamos que, a la vez, estos momentos de cambio acelerado y de incertidumbre también podrían representar una ocasión histórica para transformar esos desafíos en grandes oportunidades. El quid de la cuestión residirá en lo que decidamos: ¿nos pondremos manos a la obra sin pérdida de tiempo o preferiremos seguir durmiendo y sin enterarnos?

Sin embargo, ¿seremos capaces? Es que, además de reconocer que solemos conformarnos con ir a hacer la cola para pagar el último día (o refinanciar la deuda o legislar muy tarde), parecería que también nos encanta promover la ineficiencia.

No es sino por motivo de esa misma autocomplacencia que se critica y se habla tanto del Estado y de la burocracia; como si ambos, por sí mismos, fuesen sinónimo de excesos o de ineficiencia. Cuando, si de verdad nos interesásemos en buscar el motivo y resolverlo, encontraríamos que la causa verdadera y endémica podría estar enquistada en una contumaz pereza parlamentaria, en leyes desafortunadas o en esa costumbre de los hombres de interpretarlas en favor de sus fines políticos (o incluso de los propios y más inmediatos) y no para el mejor beneficio de todos los ciudadanos.

¿Por qué la voz de alerta? ¿Acaso vamos a seguir confundiendo la virtud de tomar la iniciativa con un ejercicio de mera improvisación de corte oportunista e inspirado en el mejor voluntarismo acostumbrado a poner parches?

Debo aclarar: no me estaba refiriendo al modo de actuación de este gobierno, aunque esta descripción le encaje tan bien como se le atribuye el déficit tan alto. Las alertas se encienden no por el agua cenagosa, lenta, en la que nos va a tocar seguir viviendo, sino por la riada que se nos estará viniendo encima si no nos preparamos, y que podrá ser como la de un Himalaya que ya no para de derretirse.

Ya deberíamos estar decidiendo si queremos ser Noés o bañistas plácidos que apenas si nos encomendamos a la suerte.

Ya tendríamos que ir dándonos cuenta de que esto no es una vernissage con masitas sino una sesión permanente sin día de cierre ni descanso. Que los elegidos elijan si nos salvamos todos o no se salva nadie. Que vuelva a reinar la cordura en la República o que siga el corso por Florida y que cada quien contrate el carro alegórico que mejor le convenga como en un espectáculo de autómatas y de variedades.

Aunque, a la hora de hacer las cosas simples y eficientes, yo no confundiría coalición con bipartidismo para simplificar. Así como tampoco diría que es lo mismo tener un gobierno único porque es más eficiente, y así permitir que un partido único nos gobierne (como algunos querrían). La eficiencia no reside en querer suprimir la diversidad de manifestaciones políticas y culturales, sino en establecer normas legales comunes que nos permitan expresarnos a todos y recibir los mismos beneficios mediante un sistema eficaz y moderno de gestión y de reparto.

Lo malo sería que quisieran matar al mensajero antes de que nazca.

Este futuro viene corriendo en bajada y, si no decidimos ponerle frenos y mayores nuevos a nuestra vieja diligencia descarriada (y hoy en manos de este gobierno), al país de todos, muy pronto, ni la propia Superintendencia va a ser capaz de desenredarle las riendas para intentar arreglarlo y acaso depararnos el mejor destino: ya sea en el Paso del Molino, en la posta del Chuy o en esa vieja parada de santa Ernestina que aún no tengo el gusto de conocer.



Ramiro Rossi
Integrante del CED del PC de Salto

El Uruguay de ayer, el de hoy y el de mañana

Uruguay tiene una de las poblaciones más envejecidas de América Latina. No descubro la pólvora diciendo esto, pero a veces pienso en esos uruguayos que nacieron, crecieron y vivieron toda su vida en este país. ¿Qué deben sentir hoy al mirar algunas noticias y ver desaparecer, poco a poco, el Uruguay que conocieron?

Me hace acordar al cuento de aquel romano que, desde su biblioteca, miraba por la ventana cómo ardía Roma, cómo quemaban los templos, degollaban a los mercaderes y violaban a las mujeres. Y frente a todo aquello se decía a sí mismo: era obvio que tenía que pasar.

¿No estamos empezando a hacer algo parecido?

Nos acostumbramos a la violencia en los estadios, a que un hinchista entre y golpee a un jugador, como pasó en Danubio; a que un partido con solo público local termine en peleas, a que un sargento choque y recién entonces descubramos que llevaba consigo a tres adolescentes del INAU.

No nos indigna lo suficiente que quien mató a Valentina Cancela en 2024 tenga una «condena de 10 años» y hoy esté estudiando en FCEA.

Estoy convencido de que este no es el Uruguay en el que muchos crecieron. Peor aún: hoy lo miran arder y empezamos a acostumbrarnos.

Mientras tanto hablamos cada vez más de salud mental, organizamos talleres, charlas y jornadas, pero conseguir un psicólogo o un psiquiatra sigue siendo casi imposible para muchos. Tengo un amigo que lleva más de un año intentando conseguir asistencia. Quizás hoy siga entre nosotros porque tuvo amigos que supieron contenerlo.

Y entonces el problema no es solamente cuánto presupuesto destinamos, sino qué hacemos con él. Si las herramientas llegan, si los organismos son eficientes y si realmente solucionan los problemas para los que fueron creados.

Porque si no, nos indignamos unos segundos, seguimos scrolleando y mañana aparece otra noticia.

Quizás ese sea el gran problema del Uruguay de hoy: cada vez cuesta más encontrar un país que ilusione a sus propios habitantes. Un Uruguay que nos haga pensar que vale la pena quedarse, construir y apostar por el mañana, y no terminar yéndose por Carrasco.

Los que hoy ven desaparecer el Uruguay que conocieron no son los únicos que tienen algo que perder. Los jóvenes también tenemos que decidir qué país queremos recibir.

¿Cuánto falta para que arda Roma?

Y quizás por eso no sea tan extraño que un técnico de fútbol como Carreño tenga hoy más presión y genere más expectativa que el propio ministro del Interior, Carlos Negro.

Quizás eso también diga bastante del Uruguay de hoy.



David Auris Villegas
Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario. Creador del ABDIVCPCE.
davidauris@gmail.com

Día del árbol y solidaridad humana

Al amanecer del uno de setiembre salí a caminar por un bosquecito, después de una noche de fuertes vientos que habían azotado la zona. Encontré un viejo sauce derribado, cuyas ramas vencidas eran sostenidas por otros árboles, como brazos poderosos que se negaban a dejarlo caer. Sus raíces también estaban abrazadas a las de otros árboles vecinos, como poderosos tentáculos. Aquella escena me conmovió: ¿acaso los árboles nos dan lecciones de solidaridad que necesitamos?

Los científicos han demostrado que los árboles sobreviven bajo diversas maneras de cooperación e interdependencia mediante raíces que funcionan como redes subterráneas. Entonces comprendí que nosotros deberíamos aprender a sostenernos cuando alguien cae, en lugar de destruirnos.

Abrazando este argumento, el Día del Árbol no solo se limita a posar para las redes sociales, sino que es una oportunidad para sembrar solidaridad en la



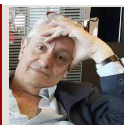
conciencia de nuestros niños y jóvenes. La educación tiene la responsabilidad de formar personas capaces de convivir, cuidar y proteger, como sucede en un bosque donde árboles, hierbas, aves y otros seres construyen juntos el ciclo de la vida.

Consciente de esta genuina solidaridad ambiental, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estableció el Día Mundial del Árbol a partir de 1974, el mismo que cada 1 de setiembre el Perú celebra el Día del Árbol. Una fecha en la que rendimos un homenaje a los árboles, que son nuestros amables pulmones verdes que nos ayudan a vivir mejor, de tal manera que, si escasean los árboles, la vida de la humanidad ingresará a un callejón poco saludable.

Basta mirar nuestro entorno: muchos colegios, institutos y universidades apenas lucen algunos árboles en sus alrededores. Entonces, ¿cómo podemos educar una sociedad ecológica si nuestras instituciones educativas no se atreven a predicar con el ejemplo? Educar ambientalmente significa sembrar, cuidar y proteger árboles, transformando nuestros espacios educativos en auténticos modelos de sostenibilidad.

Asimismo, las calles y avenidas necesitan más árboles y son los ciudadanos y los municipios los responsables de plantarlos y cuidarlos. Esta tarea constituye una responsabilidad compartida, como parte de una cultura ciudadana comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa una vida saludable.

Cuando un árbol cae, otros lo sostienen; si aprendemos esta lección ecológica, podremos construir una sociedad solidaria y cada vez más arborizada y menos aislada.

**Claudio RAMA**

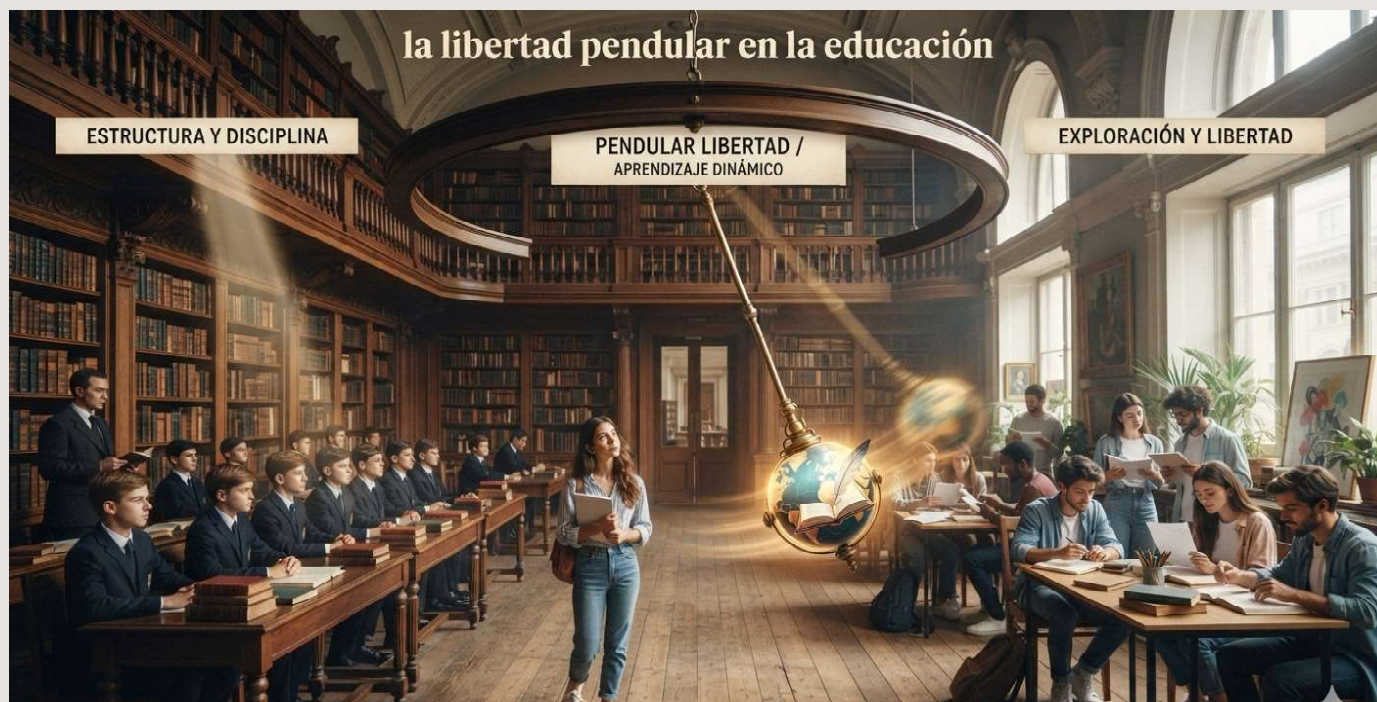
Ensayista, economista y profesor uruguayo, especializado en temas de gestión y políticas de educación superior de América Latina.

Educación: entre la libertad y la desconfianza

El gobierno anterior aprobó el Decreto N.º 316/24 de regulación de la educación superior privada que sustituyó el régimen del Decreto N.º 104/14, buscando flexibilizar procedimientos, incorporar nuevas modalidades educativas y reducir controles excesivos sobre la educación privada que limitaban su desarrollo. Sin embargo, dicho decreto fue derogado por el actual gobierno mediante el Decreto N.º 116/25, y finalmente sustituido el 4 de junio pasado por el Decreto N.º 125/26.

Ambos decretos (316 y 125) de los dos gobiernos procuran actualizar la regulación de las instituciones privadas de educación terciaria en Uruguay, pero responden a orientaciones regulatorias y enfoques educativos muy diferenciados sobre el rol del Estado, la libertad de enseñanza y de la educación superior privada. Mientras que el Decreto N.º 316/24 anterior seguía una lógica de flexibilización, innovación y mayor autonomía institucional, el actual Decreto N.º

Mas allá de múltiples cambios, bajo el Decreto N.º 316/24 se establecía que la autorización inicial para funcionar era provisional durante cinco años, y luego la institución podía solicitar la autorización definitiva, la nueva normativa de regulación diferencia los reconocimientos de carreras, que no tenían plazo de vencimiento, sino que se apoyaban en un sistema de dos etapas dadas por autorización institucional provisional y posterior autorización institucional definitiva. A diferencia el Decreto N.º 125/26 sustituye esa lógica general por un régimen de actualización de información con distintos plazos, pero de carácter permanente. El cambio es relevante, y ahora el control se vuelve definitivo con un seguimiento institucional periódico y permanente del cuerpo docente, del funcionamiento de las carreras; de la infraestructura, las modalidades educativas, sedes, cambios en la organización y del grado de cumplimiento de las condiciones originales. En este escenario normativo la apertura de carreras antes del reconocimiento es una de las diferencias más importantes entre ambas normas. Mientras que el Decreto N.º 316/24 permitía iniciar una carrera antes de que el MEC resolviera su reconocimiento, siempre que se informara públicamente a los estudiantes que estaba en trámite y además disponía que



125/26 conserva parte de esa flexibilidad, pero impone un sistema controlado de autorizaciones basado en una detallada evaluación, seguimiento, participación interinstitucional y control de la calidad sobre las IES privadas.

El Decreto N.º 316/24 estaba orientado a permitir una mayor capacidad de innovación; facilitar la apertura de carreras; reconocer nuevas titulaciones; incorporar micro credenciales; regular la inteligencia artificial; admitir educación híbrida y virtual, aunque lamentablemente con limitaciones y reducir algunos controles administrativos previos que restringían la oferta. Se consideraba que las instituciones autorizadas debían disponer de margen para innovar y que el control estatal podía operar mediante información, seguimiento posterior y revocación. A diferencia el Decreto N.º 125/26 se basa en una desconfianza regulada sobre la iniciativa privada. Aunque formalmente reconoce la autonomía académica e institucional de la sociedad civil de las instituciones de educación sin fines de lucro, lo real es la existencia de procedimientos más rígidos de evaluación, seguimiento y requisitos de cumplimientos de información. Pero su lógica no es solo restrictiva, sino que introdujo un modelo de autonomía institucional diferenciada entre las instituciones nuevas o no consolidadas que quedan sujetas a un mayor seguimiento, mientras que las instituciones acreditadas o con trayectoria pueden acceder a un régimen de consolidación con mayor capacidad para modificar carreras. Es, por tanto, un modelo de confianza condicionada por antecedentes, acreditación y capacidad institucional, aunque con inciertas perspectivas ya que la acreditación institucional no existe actualmente en el país.

si la autoridad no se pronunciaba luego de transcurrido un año desde el inicio de los cursos y la institución había cumplido los procedimientos, los estudiantes cursantes podían terminar la carrera y registrar sus títulos conforme al Decreto-Ley N.º 15.661. Aunque no constituía formalmente un silencio positivo pleno, producía un efecto parecido para las cohortes iniciadas. El nuevo decreto no reproduce esa consecuencia automática, sino que el reconocimiento continúa dependiendo de una resolución expresa de la autoridad competente, previa evaluación técnica y, cuando corresponde, dictamen del Consejo Consultivo. Adicionalmente el Decreto N.º 125/26 exige autorización para crear nuevas sedes en otra localidad y define como sede los espacios físicos donde se desarrollen actividades de enseñanza o investigación, incluso virtuales, controlando qué carreras y títulos pueden ofrecerse en esa sede. El Decreto N.º 316/24 contenía un régimen flexible de apertura de nuevas sedes, pero el nuevo decreto adopta un criterio más territorial y evita que la autorización general de una institución habilite automáticamente cualquier expansión geográfica. Un cambio sustancial de regulaciones, que además no se equilibra con los criterios de la educación superior pública, lo cual refuerza un modelo político binario de gestión y estándares distintos de la oferta pública y la oferta privada, en detrimento de una lógica sistémica donde se establezcan iguales controles de calidad para todos los oferentes, como obviamente requieren los estudiantes, las empresas y las sociedades.

La demografía también es desarrollo

Fitzgerald CANTERO PIALI
Experto en Geopolítica



Los debates demográficos han sido tratados como asuntos de especialistas. Siempre se los asoció a estadísticas de población, proyecciones de largo plazo o diagnósticos relativamente abstractos. Sin embargo, el cambio demográfico ha dejado de ser una cuestión lejana. Hoy incide directamente en la economía, en el mercado de trabajo, en la educación, en los sistemas de cuidados, en las pensiones, en la productividad y en la capacidad de los países para sostener su desarrollo.

La reciente Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo bajo el marco de la CEPAL y el UNFPA, volvió a colocar este tema en el centro de la agenda. El punto de partida es claro: la región atraviesa una transformación profunda. Caen las tasas de fecundidad, aumenta la esperanza de vida, se reduce el tamaño de los hogares, cambian las estructuras familiares, crecen los movimientos migratorios y se acelera el envejecimiento de la población.

La tentación es resumir todo en una frase sencilla: «nacen pocos niños». Pero esa mirada es insuficiente.

Por eso, una política demográfica moderna no debería reducirse a incentivos aislados para aumentar la natalidad. Ese puede ser un componente, pero no agota el problema. También se necesita mejorar las condiciones para que las familias puedan desarrollar sus proyectos de vida, fortalecer la conciliación entre trabajo y crianza, reducir barreras para los jóvenes, atraer talento, facilitar el retorno de quienes emigraron, integrar de manera inteligente a nuevos migrantes, promover la formación permanente y adaptar el trabajo a trayectorias vitales más largas.

En este punto hay una idea que conviene subrayar: la respuesta demográfica más importante puede no estar en una única política demográfica, sino en un conjunto coherente de políticas de desarrollo.

Una buena educación técnica es política demográfica, porque permite que los jóvenes encuentren oportunidades reales.

Una economía más productiva es política demográfica, porque sostiene mejores salarios y financia mejores servicios.

Una estrategia de inserción internacional es política demográfica, porque abre empleos y proyectos de vida vinculados al mundo.

Una política de vivienda accesible es política demográfica, porque incide en la capacidad de formar hogares.



El problema demográfico no es solamente cuántas personas nacen. Es también cuántas estudian, cuántas trabajan, qué capacidades tienen, cuántas emigran, cuántas regresan, cuántas llegan desde otros países, cuánto produce cada trabajador, cómo se organiza el cuidado y cómo se financia una sociedad en la que habrá, proporcionalmente, más personas mayores.

La demografía, en definitiva, no puede separarse del desarrollo.

Un país que envejece enfrenta al menos tres grandes desafíos. El primero es económico: si la población en edad de trabajar crece poco o disminuye, el crecimiento futuro dependerá cada vez más de la productividad. No bastará con tener más trabajadores; habrá que lograr que cada persona, cada empresa y cada territorio puedan generar más valor. Eso exige educación técnica, innovación, tecnología, infraestructura, logística, energía competitiva y una mejor articulación entre formación y empleo.

El segundo desafío es social. El envejecimiento no debe ser visto como una carga. Es el resultado de un logro civilizatorio: vivimos más años. Pero vivir más exige adaptar las instituciones, el mercado laboral, las ciudades, la salud y los sistemas de cuidado. Una sociedad longeva necesita pensar cómo las personas mayores pueden vivir con autonomía, participar, seguir aportando y recibir cuidados cuando los necesiten.

El tercer desafío es intergeneracional. La sostenibilidad de los sistemas de pensiones, la organización del cuidado y la distribución de oportunidades entre generaciones serán temas cada vez más sensibles. Si no se abordan con anticipación, pueden convertirse en fuentes de tensión. Si se trabajan con inteligencia, pueden dar lugar a nuevos acuerdos sociales.

Un sistema de cuidados bien diseñado es política demográfica, porque libera tiempo, reduce desigualdades y permite que más personas participen del mercado laboral.

Una estrategia para atraer y retener talento también es política demográfica, porque ningún país puede enfrentar el envejecimiento únicamente mirando hacia adentro.

El cambio demográfico nos obliga a mirar más lejos. Y, sobre todo, nos obliga a abandonar la comodidad de los debates fragmentados. No se puede discutir pensiones sin discutir mercado laboral. No se puede discutir natalidad sin discutir vivienda, ingresos, cuidados y expectativas de futuro. No se puede discutir productividad sin discutir educación técnica, innovación e infraestructura. No se puede discutir migración sin discutir integración, empleo y desarrollo territorial. Las sociedades que se anticipen a este cambio llegarán mejor preparadas. Las que lo traten como una preocupación secundaria terminarán reaccionando tarde. América Latina envejece más rápido de lo que muchos imaginan. Uruguay, por su propia historia demográfica, conoce bien este desafío. Pero el hecho de conocerlo no significa que ya esté resuelto. Al contrario: obliga a pensar con más profundidad.

La pregunta de fondo no es solamente cuánta población tendrá un país en las próximas décadas. La pregunta decisiva es otra:

¿qué capacidades tendrá esa población para vivir mejor, producir más, cuidar mejor, innovar más y sostener un proyecto de desarrollo?

La demografía no es destino. Pero sí es advertencia.

Y los países inteligentes toman las advertencias a tiempo.